

ÍNDICE AI: AMR 51/72/97/s

FECHA DE EMBARGO: 00:01 HORAS GMT DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1997

EE.UU.: El secretario general de Amnistía Internacional visita en Pensilvania a los presos condenados a muerte Mumia Abu-Jamal y Scott Blystone

En el marco de una honda preocupación por el uso racista e injusto de la pena de muerte en Pensilvania, Pierre Sané, secretario general de Amnistía Internacional, anunció que encabezaría una delegación que hoy visitará el pabellón de la muerte del estado, donde se entrevistará con los presos condenados a muerte Mumia Abu-Jamal y Scott Blystone.

«Hablamos hoy desde Pensilvania para llamar la atención del mundo sobre el uso racista e injusto de la pena de muerte en este estado, especialmente en la ciudad de Filadelfia -declaró Pierre Sané-. Amnistía Internacional tiene serias dudas sobre la imparcialidad de los procedimientos judiciales a que han sido sometidos los presos condenados con quienes vamos a entrevistarlos».

«No excusamos los actos cometidos por los hombres y mujeres culpables de asesinato, y reconocemos el enorme sufrimiento de sus víctimas y sus familias -añadió Sané-. Pero Amnistía Internacional no puede permanecer en silencio ante la violación de derechos humanos más fundamental que se comete en Pensilvania: la violación del derecho a la vida».

Sané señaló que Mumia Abu-Jamal -periodista afroamericano y ex miembro del Partido Panteras Negras, condenado por el asesinato de un agente de policía blanco de Filadelfia- «fue juzgado en una atmósfera de tal animosidad contra él, que en el primer juicio el juez admitió que el caso “tenía tendencias explosivas en la comunidad”. Pese a ello, los tribunales no consideraron la posibilidad de trasladar las actuaciones a un lugar diferente para garantizar un juicio imparcial».

Scott Blystone, que sufre una enfermedad psíquica, fue defendido por un abogado sin experiencia que lo desconocía casi todo de la legislación sobre la pena de muerte, y que no presentó pruebas atenuantes que podrían haberlo librado de la pena capital. «Este caso muestra cómo el sistema pisotea los derechos de los pobres -declaró Sané-. Mientras el fiscal del distrito asigna a sus funcionarios más brillantes y experimentados a los casos penales, los indigentes a menudo acaban siendo defendidos por un abogado con poca experiencia y mal pagado».

Amnistía Internacional expresó especial alarma ante el uso racista de la pena de muerte en la ciudad de Filadelfia, que cuenta con más de la mitad de los presos condenados a muerte del estado de Pensilvania. El 90 por ciento de los presos condenados a muerte en Filadelfia pertenece a minorías étnicas (103 de un total de 115).

«Muchos creen que la pena de muerte sólo se utiliza de forma racista en los estados del sur de EE.UU. -manifestó Sané-. Pero Filadelfia demuestra que esto no es en absoluto así. La ciudad ha condenado a muerte proporcionalmente a más personas de raza negra que ninguna otra jurisdicción del país. Ante ello, hemos de preguntarnos: ¿se utilizaría la pena de muerte hasta este punto si la mayoría de sus víctimas fueran blancas?»

Amnistía Internacional denunció también la exclusión sistemática de los afroamericanos de los jurados que enjuician los casos en que cabe aplicar la pena de muerte, una práctica que el Tribunal Supremo estadounidense declaró inconstitucional. La organización señala que, últimamente, existen más del doble de probabilidades de que los fiscales de Filadelfia descarten a un posible miembro del jurado jurado negro que a uno blanco, práctica que además se fomenta entre los fiscales auxiliares de distrito

durante las sesiones de formación. En el caso de Mumia Abu-Jamal, dos terceras partes de los candidatos a miembros del jurado que descartó el fiscal eran afroamericanos.

«En Filadelfia, la pena de muerte la aplican sobre todo personas de raza blanca contra personas de raza negra -dijo Sané-. No puede ser justo que las minorías estén sometidas a la pena de muerte en un número tan elevado y, al mismo tiempo, se las excluya sistemáticamente de participar en las actuaciones judiciales».

Amnistía Internacional ve también con preocupación desde hace tiempo el hecho de que los fiscales utilizaran de forma no pertinente la afiliación política de Mumia Abu-Jamal para obtener del jurado la condena a la pena capital. Durante la fase de imposición de la pena de las actuaciones judiciales, la fiscalía hizo referencias a la afiliación del procesado a las Panteras Negras, y dedujo que sus opiniones políticas lo predisponían para recurrir la violencia, pese a la ausencia de antecedentes penales del encausado. Esto conculcó el derecho constitucional de Abu-Jamal a la libertad de expresión y no tenía relación con el procedimiento de imposición de condena.

Según Sané, la atmósfera de odio hacia Mumia Abu-Jamal persiste hoy. Incluso cuando los tribunales están estudiando sus apelaciones, al parecer el presidente de la Orden Fraternal de Agentes de Policía de Filadelfia ha afirmado públicamente: «Queremos que lo quemen y queremos que sea pronto».

«Nos preocupa que el antagonismo manifestado por la comunidad de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley hacia Mumia Abu-Jamal, así como que la ausencia de árbitros independientes e imparciales en el sistema de apelación judicial de Pensilvania, puedan impedir que sean juzgadas de forma justa e imparcial las alegaciones que ha formulado en relación con su juicio en primera instancia», ha declarado Sané.

Amnistía Internacional también ha expresado honda preocupación por la imparcialidad del juicio de Scott Blystone, dado que el abogado nombrado por el tribunal llevaba ejerciendo la profesión sólo tres meses, nunca había intervenido en un juicio por asesinato y no tenía formación ni experiencia en la legislación sobre la pena de muerte. El hecho de que el abogado no presentara ninguna prueba atenuante no dio a los miembros del jurado más alternativa que la de condenarlo a muerte. El jurado no supo que Blystone sufre daños cerebrales y un trastorno de la personalidad, y que había recibido graves palizas en su infancia, hechos que podrían haberlo librado de la pena de muerte.

«No puede haber un acto de gobierno más grave que el de arrebatar una vida humana -dijo Sané-. Pero el estado de Pensilvania pretende matar a Scott Blystone a pesar del hecho de que fue defendido por un abogado escandalosamente mal preparado para defender la vida de un hombre».

Amnistía Internacional no es la única organización que ha expresado alarma ante la administración de la pena de muerte en Pensilvania. El Colegio de Abogados del estado ha votado recientemente a favor de una moratoria para las ejecuciones, manifestando su gran inquietud por el número desproporcionado de hombres negros y con deficiencias mentales condenados a muerte. En respuesta, la Fiscalía General acusó al Colegio de Abogados de estar «desconectado del pueblo de Pensilvania».

«¿Qué quiere decir el fiscal general con esto? -preguntó Sané-. ¿Acaso que el pueblo de Pensilvania quiere la pena de muerte incluso cuando se usa de una forma racista e injusta? Dudo que sea así. Hubo un tiempo en EE.UU. en el que los linchamientos y la segregación eran populares, pero eso no hacía que estas prácticas fueran moralmente correctas».